

Trabajo preparado para su presentación en el VII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Bogotá, 25 al 27 de septiembre de 2013.

Título: Tiempos de recomposición. La dinámica de la política argentina durante la década 2002-2013

Autores: Dr. Alberto Bonnet (UBA, UNQ) abonnet@unq.edu.ar
Dr. Adrián Piva (UBA, UNQ, CONICET) apiva72@hotmail.com

Área: Política comparada

Sub-área: Procesos políticos recientes en América Latina

Resumen:

Esta ponencia analiza la dinámica de la política argentina durante la década que se extiende entre la salida de la crisis económica y política que cerró la década de los noventa y la actualidad. Se centra inicialmente en los desafíos impuestos por la tarea de recomponer la acumulación y la dominación en crisis que enfrentaron las administraciones del período. Analiza a continuación el punto de inflexión que introdujo en esta dinámica el conflicto entre el gobierno y la burguesía agraria y agroindustrial registrado en 2008. Finalmente, a partir de este punto de inflexión, propone una periodización de la dinámica de la política durante la década.

En estas páginas intentaremos analizar la dinámica de la política argentina durante la década que se extiende entre la salida de la crisis económica y política de 2001 y la actualidad. Propondremos, para comenzar, una caracterización general de la situación política bajo las administraciones de Duhalde, Kirchner y Fernández de Kirchner, caracterización centrada en los desafíos impuestos por la tarea de recomponer la acumulación y la dominación en crisis que estas administraciones enfrentaron. Nos centraremos, a continuación, en el punto de inflexión que introdujo en esta dinámica el conflicto entre el gobierno y la burguesía agraria y agroindustrial que se registró entre marzo y julio de 2008. Finalmente, propondremos una periodización de la dinámica de la política durante la década. Distinguiremos así entre dos grandes etapas, una primera que se extiende entre el inicio del gobierno provisional de Duhalde a comienzos de 2002, pasando por el gobierno electo de Kirchner, hasta el desencadenamiento de ese conflicto agrario a comienzos de 2008 y ya con Fernández de Kirchner en el gobierno; y una segunda etapa que se prolonga desde entonces hasta el presente, incluyendo prácticamente toda la primera presidencia de Fernández de Kirchner y la segunda hasta nuestros días. Identificaremos a su vez distintos momentos dentro de cada una de estas dos grandes etapas.

1. La salida de la crisis (2002-2005)

El proceso de recomposición de la acumulación y la dominación capitalistas después del ascenso de las luchas sociales y la crisis que culminaron en diciembre de 2001 se inició y avanzó considerablemente entre enero de 2002 y mayo de 2003, es decir, durante la administración provisional encabezada por Eduardo Duhalde (véase Bonnet 2007a). Las administraciones de Duhalde y Kirchner deben ser consideradas en este sentido como partes integrantes de un mismo período dentro de la historia política argentina reciente. Fueron distintos momentos de un mismo

proceso de recomposición de la acumulación y la dominación, aunque el kirchnerismo presente especificidades que serán tratadas enseguida.

La administración de Duhalde alcanzó una serie de éxitos claves en su empeño de morigerar las consecuencias más catastróficas de la crisis que permitirían encauzar las luchas sociales previas dentro de los límites del estado y el mercado capitalistas. Duhalde evitó que la devaluación forzada de diciembre de 2001 desembocara en un nuevo proceso hiperinflacionario y mantuvo controlada la apreciación del dólar. Logró contener a mediano plazo la inflación (de un promedio mensual del 4,6% en el primer semestre de 2002 a uno del 1,3% durante el segundo y del 0,35% durante el primero de 2003) y el deterioro del salario real (de entre 25 y 35%, según los sectores). Duhalde también avanzó hacia una solución duradera del congelamiento de los depósitos bancarios mediante la devolución combinada en efectivo y bonos, desactivando las demandas de los ahorristas. Mientras que la pesificación asimétrica socializó las deudas de las grandes empresas y diversas compensaciones a los bancos evitaron un crac bancario generalizado. Sostuvo asimismo una estrategia ante los organismos financieros internacionales que, combinando presiones y pagos, marchó hacia una renegociación de la deuda que revirtiera la situación de *default* pasivo en que se encontraba. Negoció tarifas con las empresas de servicios públicos privatizadas, limitando los aumentos a montos mucho menores a los que hubieran resultado de su dolarización. Y multiplicó (y modificó la gestión de) los subsidios de desempleo a través del plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, descomprimiendo y redefiniendo así las demandas del movimiento piquetero en su conjunto y sumando a los dirigentes de la amplia mayoría del mismo a su mesa de negociaciones. Y la administración de Duhalde gozó, además, de un amesetamiento de la depresión económica e incluso de una lenta recuperación de ciertos sectores productivos vinculados a la exportación y a la sustitución de importaciones. Desde el tercer o cuarto trimestre de 2002, las tasas de uso de la capacidad instalada y de empleo comenzaron a repuntar, y durante 2003 el producto, el consumo y la inversión aumentaron francamente.

Precisamente, las elecciones presidenciales de abril de 2003 pusieron de manifiesto ese éxito alcanzado por la administración Duhalde. Desde el punto de vista del régimen, las elecciones restauraron la continuidad de una democracia impugnada en el proceso de luchas sociales que culminó en la insurrección de diciembre. Y desde el punto de vista del propio gobierno, las elecciones arrojaron como resultado la imposición de su delfín.

El partido en el gobierno fue ratificado como único partido de gobierno (el PJ, entre sus tres fórmulas, cosechó más del 60% de los votos positivos) y, dentro de este partido, se impuso el candidato del gobierno (Kirchner, con el 22%). Sin embargo, el PJ quedó ratificado en las elecciones como único partido capaz de gobernar porque los restantes partidos (la UCR y sus desprendimientos ARI y Recrear) se encontraban sumergidos en una crisis aún más profunda que la suya. Pero la situación del propio PJ también era crítica, pues el expediente de realizar sus elecciones internas junto con las generales había salvado apenas en las formas la unidad de un partido profundamente dividido. Además, la candidatura de Kirchner se impuso, pero con una escueta segunda minoría. Por lo tanto, la tarea de la recomposición del poder político que heredaba el kirchnerismo tenía una doble dimensión. Por un lado, la reconstitución del consenso en torno al ejercicio del poder político como fundamento de la estabilización de la dominación política y económica del capital. Por otro lado, la necesidad de construir consenso en torno a la figura del nuevo presidente que había llegado al gobierno con una debilidad de origen. Si desde el punto de vista de la acumulación no se hallarán diferencias fundamentales con el sentido de la recomposición iniciada en el período de Duhalde, es en esta función política y en el particular entrelazamiento de ambas dimensiones de la recomposición de la dominación donde se hallará la especificidad del kirchnerismo y las principales diferencias con el Duhalidismo.

En efecto, durante la primera mitad de su mandato Kirchner, retomó y profundizó las políticas que Duhalde había implementado para salir de la crisis. Este período se extendió desde que asumió la presidencia en mayo de 2003 hasta que reemplazó a su primer ministro de economía Roberto Lavagna por Felisa Micheli en noviembre de 2005.

Kirchner, inicialmente, contuvo con cierto éxito la inflación gracias a unos equilibrios presupuestarios sustentados en la reconstitución de los ingresos públicos, provenientes a su vez de los impuestos sobre el consumo y las exportaciones (las retenciones agrarias y petroleras), que atravesaron una franca recuperación. Más aún, los superávits alcanzados, que excedieron las previsiones presupuestarias del gobierno y las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, permitieron a su vez una importante reconstitución de las reservas. Kirchner revirtió también la situación de *default* pasivo en que había caído la deuda externa, retomando los pagos a los organismos financieros internacionales en 2003 y 2004, cerrando una reestructuración de los plazos y montos de las $\frac{3}{4}$ partes de la deuda en manos privadas a comienzos de 2005, y cancelando anticipadamente la deuda en manos del FMI, a fines de 2005. Kirchner caminó asimismo por la senda inaugurada por Duhalde en relación con las empresas públicas privatizadas. La pesificación y el congelamiento de las tarifas que siguieron a la devaluación desataron presiones por parte de las empresas privatizadas, los gobiernos español y francés y los organismos internacionales que culminaron en decenas de juicios en el CIADI. Kirchner respondió concediendo en materia de marcos regulatorios, inversiones, salarios y especialmente otorgando subsidios, a cambio de que las empresas de servicios públicos no aumentaran sus tarifas; permitiendo que aumentaran las tarifas para los grandes consumidores a cambio de que no las aumentaran para los pequeños; y rescindiendo los contratos de las empresas quebradas, vaciadas o que atravesaban intensos conflictos, como las de correos y agua corriente y algunos ferrocarriles y aerolíneas. A través de esta serie de medidas Kirchner alcanzó su objetivo de mantener las tarifas de los servicios públicos a niveles que no desataran nuevas protestas masivas sin revertir en su conjunto la estructura de privatizaciones heredada de los noventa. Kirchner, finalmente, contó con la conversión del amesetamiento y la incipiente recuperación de la economía durante la administración de Duhalde, en una franca y sostenida expansión. El producto se incrementó desde fines de la administración duhaldista o desde comienzos de la kirchnerista (esto es, desde 2002 en pesos corrientes o desde 2003 en pesos constantes), recuperando su nivel previo a la crisis (en 2005, el nivel de 1998) y superándolo más tarde. Esta expansión económica indujo una mejora en los niveles de desempleo y de pobreza, que cimentó el éxito de la estrategia de reconstrucción del consenso entre los sectores más pauperizados de la clase obrera y una expansión del consumo del conjunto de la sociedad, sustentando materialmente el consenso inicial del kirchnerismo no sólo entre los asalariados sino también en la clase media.¹ Kirchner conservó también el programa de subsidios de desempleo implementado por Duhalde y le sumó una nueva artillería de programas asistenciales (el Plan Alimentario Nacional, el Plan de Desarrollo Local y Economía Social y el Programa Familias,) destinados a contener al movimiento piquetero así como a recomponer el poder territorial del peronismo y a tejer su propia red política clientelar.

Pero la administración kirchnerista desarrolló, además, una estrategia de reconstrucción del consenso basada en una recuperación selectiva y en la resignificación de demandas formuladas por los grupos sociales movilizados contra el menemismo y el gobierno de la Alianza. Ello se traduciría en la incorporación a su coalición política de parte de ellos.

En primer lugar, Kirchner produjo una ruptura en la relación con los movimientos de desocupados respecto de los gobiernos previos, reconociéndolos como interlocutores legítimos y adoptando una política de seducción, negociación y otorgamiento de concesiones. Esto produjo la fractura del movimiento de desocupados entre oficialistas, moderados y opositores. En un contexto de alta conflictividad que se extendería hasta 2004 tendió a satisfacer las demandas de las organizaciones oficialistas y en menor medida de otras organizaciones opositoras, pero reemplazando los más universales planes “jefes y jefas de hogar”, implementados por Duhalde, por subsidios a microemprendimientos y cooperativas de trabajo a través de diversos programas, como

¹ El desempleo se redujo del 20,4 al 11,4% entre el primer trimestre de 2003 y el primero de 2006 y la pobreza del 54 al 34% entre el primer semestre de 2003 y el segundo de 2005 (según datos del INDEC de entonces).

el “Manos a la Obra”. Sin embargo, el gobierno negoció y otorgó concesiones a organizaciones que enmarcaron la protesta en límites que progresivamente fue tornando más restrictivos. Simultáneamente, construía un discurso público que vinculaba protesta radical y delito, especialmente invocando la figura de la “extorsión”. El éxito de esta política se evidenció en la caída del número y la radicalidad de las acciones protagonizadas por movimientos de desocupados, fundamentalmente desde 2005.

En segundo lugar, desde 2003 se evidenció una creciente conflictividad de los asalariados ocupados cuyo pico se alcanzaría en 2005. Esta recuperación de la acción sindical tuvo como fundamento la caída del desempleo, el aumento de precios y la vuelta a la centralidad de la lucha salarial. En este marco el gobierno logró canalizar el conflicto a través de una lógica de satisfacción gradual de demandas – la mayoría de los conflictos tuvieron resoluciones favorables para los trabajadores - resituar al ministerio de trabajo como ámbito de negociaciones tripartitas y, por lo tanto, recomponer la apariencia de autonomización del Estado respecto de la sociedad civil. Cuando el conflicto amenazó con desbordar los mecanismos institucionales de negociación o desafiar los límites demarcados por el gobierno, éste fue, por lo general, capaz de aislarlo. Ello determinó también el alineamiento de la mayoría del universo sindical.

En tercer lugar, la respuesta a la protesta social fue predominantemente no represiva con un mínimo de represión selectiva orientada a establecer los límites tolerables de la protesta. Esta política del gobierno nacional estuvo en gran medida vinculada a un proceso de deslegitimación del uso de la violencia material estatal como respuesta a las protestas sociales desde 1997 hasta los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en junio de 2002, que le costaron la salida anticipada a Duhalde.

En cuarto lugar, la política de recuperación de demandas de grupos sociales movilizados abarcó asuntos de naturaleza democrática e institucional, que habían movilizado particularmente a los sectores medios. Las relacionadas con derechos humanos se encuentran en el centro de estas medidas. Kirchner inauguró su mandato anunciando una purga en la cúpula de las fuerzas armadas, comprometida con la represión de la dictadura, que afectaría a la mitad de sus mandos y se convertiría en la mayor purga de su historia. Poco después, en agosto de 2003, el congreso declaró la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Y en el siguiente aniversario del golpe de estado, en marzo de 2004, Kirchner entregó las instalaciones del ex centro clandestino de detención de la ESMA para la construcción de un Museo de la Memoria. Estas medidas, coincidentes con reivindicaciones históricas del movimiento de derechos humanos, resultaron suficientes para que la mayoría de las organizaciones quedara encolumnada detrás del gobierno.

Las medidas tendientes a la depuración de ciertas instituciones que simbolizaban de modo privilegiado los manejos corruptos y arbitrarios del pasado menemista y que habían sido objetivo de la protesta social también fueron importantes en esta construcción de consenso. El caso más relevante es la depuración de la Corte Suprema de Justicia, iniciada ya en junio de 2003. Y el segundo caso en orden de importancia fue la depuración del PAMI, a partir de julio de 2003. Medidas como estas permitieron a la administración kirchnerista diferenciar su estilo de gobierno respecto de los anteriores estilos de gobierno menemista y aún duhaldista.

En este sentido, en quinto lugar, el discurso de la “transversalidad” – término que designó una construcción política que atravesaría a distintos partidos, movimientos y tradiciones políticas y que desplazaría del centro del armado político al Partido Justicialista – pareció enfrentar a Nestor Kirchner a la “vieja política”, situación cuyo climax lo representó el enfrentamiento con su propio mentor: Eduardo Duhalde, a quien derrotó en su propio territorio y con el apoyo del su otrora aparato político. Este discurso empalmó con la crítica a la “clase política” que atravesó a los grupos sociales movilizados en diciembre de 2001.

A partir del consenso alcanzado gracias a estas medidas –y siempre sobre la base de aquella expansión económica- Kirchner se impuso en las parlamentarias de 2005. A mediados de 2004 – y contrariamente a su discurso - Kirchner había optado por apoyarse en una corriente propia dentro del justicialismo (en vez de apoyarse en una nueva fuerza *transversal*) y el Frente para la Victoria se impuso ampliamente en las elecciones de octubre. El kirchnerismo alcanzó así en las

parlamentarias de 2005 el éxito que no había alcanzado en las presidenciales de 2003. Pero además, el justicialismo kirchnerista alcanzó un 40% de los votos a escala nacional, mientras los restantes sectores justicialistas sumados apenas alcanzaron un 11%. En la medida en que en las elecciones de octubre de 2005 volvieron a solaparse internas y generales, como ya había sucedido en abril de 2003, mediante esta victoria Kirchner completó su apropiación del PJ. Y esta apropiación del PJ, complementaria del mencionado reemplazo de Lavagna por Miceli y otros cambios de gabinete, le permitió a Kirchner completar su apropiación de su propia administración.

En síntesis, durante el período que se extendió desde que Kirchner asumió la presidencia en mayo de 2003 hasta que reemplazó a su ministro Lavagna en noviembre de 2005, el rumbo político seguido por su administración puede definirse, por un lado, como la recuperación y continuación de la tarea emprendida por su antecesor Duhalde en el sentido de administrar políticamente la salida de la profunda crisis de acumulación y dominación de 2001. Pero, por otro lado, el rasgo que singulariza este período se encuentra en el entrelazamiento del doble objetivo de reconstrucción de la legitimidad del poder político – que no podía concluir el gobierno provisional de Duhalde - y de construcción de un consenso en torno a un gobierno surgido con una base débil y estrecha – que resultaba ineludible para su estabilización. Es en el modo en que Kirchner llevó a cabo este doble objetivo donde se encuentra la especificidad del kirchnerismo y que lo distingue tanto del período anterior a la insurrección del 2001 como del propio duhaldismo del que surgiera.

2. La estabilización (2006-2007)

Entre el reemplazo del ministro Lavagna por parte de Kirchner en noviembre de 2005 y el desencadenamiento del conflicto entre el gobierno de Fernández de Kirchner y la burguesía agraria en marzo de 2008 se extiende un período algo diferente. Ya hacia fines de 2005 la crisis de acumulación y dominación de 2001 había sido completamente revertida y el período que se inició entonces estuvo signado por una estabilización de la situación económica y política. Esto no quiere decir, sin embargo, que la dinámica política de las administraciones kirchneristas durante este período dejara de explicarse, en última instancia, por la empresa de recomposición de la acumulación y la dominación capitalistas, sino simplemente que esta recomposición ya alcanzó cierta cristalización en un funcionamiento estable de la acumulación y la dominación.

Durante este período, ciertamente, el kirchnerismo enfrentó dos problemas importantes, mutuamente relacionados, que no podemos dejar de mencionar: el aumento de la conflictividad de la clase obrera y la aceleración de la inflación. La inflación, que ya se había situado en un 9,6% anual a fines de 2005, tendió a acelerarse hacia fines de 2006. La respuesta de la administración kirchnerista fue la intervención del INDEC y el inicio de la tergiversación sistemática de los datos acerca de la inflación. Y, mientras tanto, la inflación acumulada entre 2007 y 2012 y no registrada por el INDEC alcanzaría la friolera de un 129,9%.² Sin embargo, durante el período en consideración, la expansión económica y el aumento del salario real morigeraron su impacto político. El otro problema importante fue el ascenso de la conflictividad obrera. Se trata de un ascenso protagonizado por trabajadores empleados en los sectores privado y público, organizados en cuerpos de delegados, comisiones internas, corrientes sindicales internas o seccionales opuestas a las burocracias o simplemente autoconvocados, que recurrían a la huelga por reivindicaciones salariales y, en menor medida, por reivindicaciones vinculadas con el empleo y las condiciones de trabajo. Hubo un sostenido aumento de la cantidad de conflictos desde 2003 cuyo pico fue 2005 y, después de una leve disminución durante 2006, un nuevo aumento en 2007.³ Sin embargo, aunque algunos conflictos obreros alcanzaron repercusiones públicas y aunque las demandas salariales podían representar indirectamente un desafío para el gobierno dentro del mencionado contexto de alta inflación, este ascenso de la conflictividad obrera se redujo a un aumento de la cantidad de conflictos, sin articularse ni convertirse en un desafío político a escala nacional para el gobierno. El

² Según IPC-9 provincias elaborado por CIFRA - CTA.

³ Véase Cotarelo (2010) y Piva (2012b).

apoyo de la CGT reunificada y conducida por Moyano desempeñó un papel decisivo en este sentido: en un contexto de aumento del salario real y del empleo y de fuerte consenso del gobierno entre los asalariados, tuvo éxito en mantener aislados los distintos conflictos y en contener las demandas salariales dentro de las pautas fijadas por el gobierno.

Durante 2006 y 2007 también se produjo un alejamiento de los “sectores medios” respecto del kirchnerismo que se expresó en un aumento de las protestas y también en el terreno electoral. Específicamente, podemos observar un vínculo entre el proceso de movilización de “clase media” de 2006 y 2007 y la reaparición de tópicos de protesta que señalan un hiato entre los “sectores medios” y el gobierno pero que refieren, más generalmente, a una crisis de confianza en el sistema político que tiende a empalmar con una crítica al “estilo político” del gobierno en clave anti populista (Piva 2012b). Dicho aumento de la protesta fue simultáneo con el abandono de la “transversalidad” por parte del kirchnerismo, con los intentos de reforma de la constitución para posibilitar la reelección indefinida de gobernadores peronistas, con la denuncia de fraude en Córdoba de Luis Juez, que lo condujo a la ruptura con el kirchnerismo, con la intervención del INDEC, etc. La persistencia de la crisis de representación entre los “sectores medios”, su alejamiento del kirchnerismo identificado ahora con la “vieja política” y la articulación de “rechazo de la política” y crítica del estilo político del gobierno en clave antipopulista serán fundamentales a la hora de entender la movilización antikichnerista de clase media desde 2008.

Sin embargo, ni la aceleración de la inflación ni el resurgimiento de la conflictividad de los trabajadores, ni la activación y alejamiento de la “clase media” impidieron la mencionada estabilización de la situación económica y política. Hacia fines de 2007, la restauración del orden parecía haberse completado y el kirchnerismo se consolidaba. Las elecciones presidenciales de octubre ratificaron el triunfo que había logrado en las parlamentarias de 2005: la fórmula encabezada por Fernández de Kirchner, con un 45,3% y 22 puntos de ventaja sobre el segundo, se impuso en la primera vuelta sobre una oposición que continuaba dispersa y el kirchnerismo consolidó su mayoría en Senadores, alcanzó la mayoría en Diputados, e impuso 16 gobernadores, entre propios y aliados, de los 22 en disputa.

Decíamos más arriba que dicha estabilización política supuso la cristalización de ciertas características de la acumulación y de la forma de estado. Permítasenos entonces una breve mención a esas características antes de analizar el cambio de etapa que significó el conflicto en torno a las retenciones a las exportaciones agropecuarias de 2008.

3- Estrategia de acumulación y forma de estado

Entre fines de 2005 y comienzos de 2008 asistimos a un proceso de estabilización de aquella salida de la crisis, que resultó en el establecimiento de una estrategia de acumulación y una forma de estado más o menos estables. La estrategia de acumulación en cuestión puede definirse como el resultado de la aplicación de una serie de medidas de política económica adoptadas como respuestas a la crisis de acumulación de 2001 sobre el aparato productivo emergente de la profunda reestructuración capitalista registrada durante la década previa. Las principales políticas en cuestión son (1) la devaluación y el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo; (2) la implementación de retenciones a las exportaciones; (3) la pesificación asimétrica de deudas y depósitos, el salvataje de la banca y el tránsito hacia un sistema financiero pesificado; (4) el default y la reestructuración de la deuda externa; (5) el congelamiento y renegociación de las tarifas de los servicios públicos y la provisión de subsidios.

La devaluación se encuentra en el origen de la estrategia de acumulación de la década porque vino a imponer inflacionariamente la drástica reducción del salario que no había podido imponerse deflacionariamente durante la crisis de la convertibilidad. A la devaluación forzada de enero de 2002 siguió un proceso de apreciación del dólar que culminó en abril rozando los 4\$. Pero el tipo de cambio nominal se estabilizó en la segunda mitad del año en un promedio de \$3,6,

descendió a unos \$3 durante 2003 y se mantuvo estable durante el resto del período considerado.⁴ El mantenimiento de un tipo de cambio competitivo a través de intervenciones del BCRA en el mercado de divisas fue así, durante el período en consideración, el sostén del crecimiento de las exportaciones y de los altos superávits comerciales, que constituyen una de las características distintivas de la estrategia de acumulación vigente. Esta expansión de las exportaciones permitió a su vez la imposición de las retenciones. Estos impuestos a las exportaciones agropecuarias, hidrocarburíferas y mineras variaron durante el período (en cuanto a los productos grabados y las alícuotas), pero en su conjunto arrojaron ingresos que pasaron de unos \$ 5.000 millones en 2002 a unos \$ 20.000 millones en 2007, representando entre el 9 y el 12% de la recaudación total. Las retenciones alentadas por la expansión de las exportaciones, junto con los impuestos al consumo alentados por la expansión interna alimentaron los superávits fiscales, los cuales constituyen otra de las características distintivas de la estrategia de acumulación vigente.

La devaluación del peso en enero de 2002 acarrió asimismo una crisis para el dolarizado sistema financiero preexistente -el 70% de los depósitos y el 80% de los créditos estaban en dólares. La pesificación asimétrica de estos depósitos y créditos implicó, en este sentido, una masiva licuación y estatización de pasivos de las grandes empresas. Y fue complementada con un salvataje al sistema financiero a través de diversos mecanismos (compensaciones, bonos, asunción de deudas provinciales, etc.) que insumió unos USD 24.000 millones y la emisión de nueva deuda pública. Tras este salvataje el sistema financiero doméstico comenzó un lento proceso de recuperación. El sistema resultante de este proceso fue inicialmente una banca menos dependiente del sector público (el estado, debido a sus superávits fiscales, no sólo perdió peso como demandante de fondos sino que incluso se convirtió en oferente de fondos mediante la cancelación de préstamos y bonos y la realización de depósitos). Esto, sumado a los fondos depositados por el sector privado, que superan a los créditos, resultó además en una alta liquidez y tasas de interés mucho más bajas que en los noventa.

El *default* en el que había caído la deuda externa fue superado mediante pagos de intereses y principales (en 2003 y 2004), la reestructuración de los plazos y montos de la deuda en manos privadas (realizara en su mayor parte a comienzos de 2005) y la cancelación anticipada de la deuda con el FMI (a fines de 2005). Durante este período, además, el estado no recurrió a la emisión de nueva deuda externa (salvo bonos por unos USD 6.100 millones, adquiridos por Venezuela entre 2005 y 2008). Esto modificó radicalmente la vinculación de la economía doméstica con los mercados y organismos financieros internacionales, siendo esta otra de las características distintivas de la estrategia de acumulación vigente.

Finalmente, la devaluación fue acompañada por una pesificación y un congelamiento de las tarifas de las empresas privatizadas o concesionadas en los noventa. Entre las distintas medidas compensatorias que acompañaron esta decisión tarifaria (en materia de marcos regulatorios, inversiones, salarios, etc.) se destacó el otorgamiento de subsidios. La cuenta en servicios económicos, que incluye dichos subsidios, que se redujo durante la década de los noventa (-40% o -1,9 puntos del PBI), se incrementó a una altísima tasa durante la siguiente década (un 710% o 4,2 puntos del PBI).

La estrategia de acumulación vigente resulta, entonces, de la aplicación de todas estas medidas políticas sobre el aparato productivo emergente de la profunda reestructuración capitalista de la década previa. Y estas medidas comparten una característica que las distingue de las medidas económicas implementadas en los noventa: apuntan a arbitrar activa y directamente entre los intereses de las distintas clases y fracciones de clase a través de una serie de trueques: tipo de cambio competitivo que favorece a las grandes empresas exportadoras, con retenciones a las exportaciones; pesificación asimétrica de deudas y depósitos, con salvataje del sistema financiero; congelamiento y renegociación de tarifas de las empresas privatizadas o concesionadas, con subsidios; y así sucesivamente. Y la inflación, que no es sino la manera en que se expresan

⁴ El tipo de cambio real y el tipo de cambio real multilateral, aunque por debajo, siguieron este comportamiento del tipo de cambio nominal.

cotidianamente los conflictos entre esos intereses de las distintas clases y fracciones de clase, fue el marco general en el que se implementó este arbitraje. Este arbitraje expresa las tensiones entre ciertas restricciones de la acumulación y una lógica de construcción de consenso que requiere de la recuperación y satisfacción gradual de demandas. Más abajo volveremos sobre esto.

Algo semejante puede decirse respecto de la forma de estado que se estableció. También la forma de estado en cuestión puede definirse como el resultado de la aplicación de una serie de políticas adoptadas como respuestas a la crisis de dominación de 2001 sobre el estado resultante del proceso de reforma del estado de la década previa. Las principales políticas en cuestión son: (1) las políticas que afectan a la relación entre el estado y el mercado, entre las cuales se destacan las encaradas ante las empresas de servicios públicos privatizadas; (2) las políticas que afectan las relaciones entre los distintos poderes dentro del estado y/o modifican las características internas de esos poderes; y (3) las medidas que atañen a la evolución del aparato y las funciones del estado.

Comencemos con las políticas en relación con el mercado. Entre ellas destacan las adoptadas ante las empresas de servicios públicos privatizadas, por la enorme importancia que el proceso de privatizaciones había revestido en la reforma del estado de los noventa. Tanto la administración provisional de Duhalde como la electa de Kirchner se limitaron en la mayoría de los casos al mencionado manejo de las tarifas a cambio de subsidios, cediendo muchos de los restantes aspectos contractuales y regulatorios.⁵ La estatización de algunas empresas quebradas, vaciadas o que atravesaban intensos conflictos laborales no cambió sustancialmente este panorama. La continuidad de las privatizaciones y de las concesiones se convirtió así en uno de los aspectos de continuidad más importantes respecto de esa forma de estado de los noventa. Pero por esa razón la política de subsidios – que el gobierno no ha podido desmontar a pesar de su voluntad explícita de hacerlo – y las inconsistencias y vaivenes de la política de regulación expresan las tensiones entre dicha continuidad y la transformación de las bases de producción de consenso. Así como ciertas inconsistencias macroeconómicas originadas en el cambio en la estrategia de acumulación, especialmente en el sector energético.

En cuanto a las relaciones entre poderes, la autoridad económica y monetario-financiera perdió, durante la década, la posición privilegiada dentro del poder ejecutivo de la que había gozado durante la década previa. Ya la administración provisional de Duhalde desdobló el Ministerio de Economía en uno de Economía y Finanzas Públicas y otro de Producción. Pero más importante fue el reemplazo, ya por parte de la administración de Kirchner en 2003, de ese ministerio de producción por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, cartera que absorbió las áreas de Energía y Comunicaciones que pertenecían al Ministerio de Economía, y otras áreas dependientes de Presidencia y de otros ministerios. El peso de este ministerio de economía se vio menguado, además, por el mayor peso alcanzado por el Ministerio de Trabajo gracias a las convocatorias a paritarias y a su intervención en temas conflictivos y de impacto económico como la reforma de la Ley de ART o la Reforma Laboral. La administración de Fernández de Kirchner, finalmente, agregó dos nuevos ministerios: los de Industria y Turismo, en 2008, y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en 2009 que redujeron aun más el peso del remanente Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Además, desde el reemplazo del ministro Lavagna por parte de Kirchner en noviembre de 2005 el ministerio de economía se convertiría en mero apéndice de la presidencia y los nombres de los ministros desde entonces confirmaron este cambio. La pérdida de independencia del BCRA, finalmente, confirma esta pérdida de peso de la autoridad económica y monetario-financiera. La administración de Duhalde había reformado su carta orgánica para devolver al banco central sus funciones, vedadas por la convertibilidad, de emitir billetes sin mantener relación con su nivel de reservas, de actuar como prestamista en última instancia de la banca privada, de asistir al tesoro y de intervenir en el mercado cambiario. Esta pérdida de independencia se pondría en evidencia cuando, en diciembre de 2009, se produjo el enfrentamiento entre la presidencia y el BCRA a raíz de la negativa de su director de aportar las reservas requeridas

⁵ Véase Aspiazu y Schorr 2003 y Thwaites Rey y López 2004.

por Fernández de Kirchner para pagar deuda externa. Este enfrentamiento acabó en la destitución por decreto del director del BCRA.

Un análisis preciso permite advertir también ciertos cambios, durante el período considerado, a propósito de la subordinación de los poderes legislativo y judicial al poder ejecutivo reinante en los noventa. El reiterado recurso de las administraciones de Duhalde y Kirchner a la legislación mediante decretos de necesidad y urgencia entre 2002 y 2007 y las sucesivas prórrogas y la conversión en ley de la delegación de facultades del legislativo en el ejecutivo en 2006 parecen mostrar una continuidad de la subordinación del poder legislativo al ejecutivo.⁶ Sin embargo, los superpoderes y el empleo de decretos de necesidad y urgencia, instaurados o reforzados en el contexto de las grandes crisis y reestructuraciones de los noventa, adquirieron un carácter distinto en la década posterior de recuperación de las políticas cambiaria y monetaria y de posibilidades de captación de excedentes mediante impuestos sobre un amplio superávit comercial. Y, en cualquier caso, la cantidad de decretos de necesidad y urgencia sancionados se redujo sensiblemente durante la administración de Fernández de Kirchner y, en 2009, los *superpoderes* fueron limitados por el propio proyecto del ejecutivo y prorrogados sólo por un año. La resolución en el senado del conflicto entre el gobierno y la burguesía agraria en julio de 2008, por su parte, sacudió la subordinación del poder legislativo al ejecutivo. Y la posterior derrota electoral del oficialismo en las parlamentarias de junio de 2009, que resultó en la pérdida de su mayoría parlamentaria, reforzó el protagonismo del congreso. Sin embargo, el carácter de estas transformaciones en la relación entre los poderes y su impacto sobre la forma de estado fueron provisorios, porque la incapacidad de la fragmentada oposición parlamentaria de articular una estrategia que fuera más allá del bloqueo legislativo y la recomposición del consenso social en torno al gobierno y a la presidenta devolvieron más tarde importantes cuotas de poder al ejecutivo. Esto se evidenció en su creciente apelación al veto.

Más evidente es la menor subordinación del poder judicial al ejecutivo durante el período en consideración. La justicia en su conjunto y especialmente la corte suprema heredada de los noventa se habían hundido en un profundo descrédito. Kirchner, como ya señalamos, convirtió la reforma de esta desacreditada justicia en uno de sus recursos para construir consenso. Y su reemplazo de los jueces de la corte suprema heredados por jueces más prestigiosos e independientes modificó la relación entre el poder judicial y el poder ejecutivo que han protagonizado varios conflictos desde entonces.

Si analizamos la división jurisdiccional del poder entre los niveles nacionales, provinciales y municipales, la ecuación preexistente entre centralización y descentralización del estado parece haberse mantenido. Ni la descentralización de las funciones educativas y sanitarias del estado, ni la posibilidad de un ejercicio centralizado de su función represiva, se revirtieron durante la década en curso. Sin embargo, el estado nacional parece haber recuperado mayor protagonismo y este mayor protagonismo no se registra en materia represiva, sino en materia de asistencia social y, principalmente, de subsidios.

También el manejo del gasto público es importante para el análisis de la forma de estado vigente. El gasto público total aumentó tanto durante la década del noventa como durante la década siguiente, pero a ritmos muy diferentes (un 4,6 y 14 puntos del PBI, respectivamente). Esto significa una expansión del aparato de estado. Pero más significativa aún es la composición de este gasto público. El gasto burocrático (administración, justicia, defensa y seguridad) no registró cambios significativos. El gasto social (educación, salud, asistencia, previsión, subsidios de desempleo) acompañó el crecimiento del gasto en su conjunto, pero ganó importancia la promoción y asistencia social respecto de los subsidios de desempleo. La mayor diferencia en la composición del gasto público entre ambas décadas radicó, como ya señalamos antes, en el gasto en servicios económicos, que incluye los subsidios a los combustibles, la energía y el transporte. Finalmente, el gasto en servicio de deuda pública siguió teniendo una presencia significativa, pero se interrumpió

⁶ Para un análisis de conjunto, véase Bonvecchi y Rodríguez (2006).

el acelerado aumento de su incidencia que se había registrado en la segunda mitad de la década pasada. Si consideramos como indicador el número de dependencias del estado o de empleados públicos, se confirma este crecimiento del aparato de estado. El aparato del estado nacional es al menos tan importante como el aparato de estado previo a la crisis en materia de ministerios, secretarías y subsecretarías y aumentó un poco la cantidad de agentes. Pero este crecimiento del aparato del estado nacional es insignificante comparado con el crecimiento del aparato de estado en su conjunto: el empleo en el sector público se incrementó un 40% (o sea, más que el empleo privado) durante la década y prácticamente la totalidad de este incremento se debe a las provincias (un 71%) y los municipios (otro 23%).⁷

Los cambios registrados en la forma de estado durante la década aparecen, entonces, como resultado de la aplicación de una serie de medidas políticas, adoptadas como respuestas a la crisis de dominación 2001 sobre el aparato y las funciones del estado emergentes de la profunda reforma del estado de la década previa. Su resultado fue una tendencia a la desorganización de la forma de estado cristalizada en los '90 y su corazón – en oposición a aquel estado - fue el desarrollo de una capacidad de arbitraje activa y directa entre los intereses de las distintas clases y fracciones de clase. Dicha capacidad de arbitraje, anclada en los cambios en la estrategia de acumulación, fue condición de posibilidad y expresión de una estrategia de construcción de consenso basada en la satisfacción gradual de demandas. Y de las tensiones entre estrategia de construcción del consenso y estrategia de acumulación.

4. La crisis política y la reinención del kirchnerismo (2008-2012)

Desde la salida de Lavagna en noviembre de 2005 hasta marzo de 2008 pareció estabilizarse la situación económica y política y consolidarse el kirchnerismo en el gobierno. El conflicto entre el flamante gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la burguesía agraria que se desarrolló durante la primera mitad de 2008 puso fin a ese período. Este conflicto constituyó así un punto de inflexión dentro de la dinámica política de la década, dividiéndola en dos etapas: un primer kirchnerismo (correspondiente al sexenio 2002-2007) y un segundo kirchnerismo (del sexenio 2008-2013). Como mostramos en los apartados anteriores, la dinámica política de las administraciones kirchneristas estuvo determinada, hasta esta crisis de 2008, por el proceso de recomposición de la acumulación y la dominación capitalistas después del ascenso de las luchas sociales y la crisis que culminaron en diciembre de 2001. La hipótesis que queremos proponer ahora consiste en la afirmación de que, después de que la administración de Fernández de Kirchner a mediano plazo logró superar el desafío político que le planteó el conflicto agrario, a pesar de su fracaso a corto plazo, la dinámica política de las administraciones kirchneristas pareció modificarse y ya no explicarse más a partir de ese proceso de recomposición de la acumulación y la dominación.

El *lock-out* capitalista agrario fue el primer desafío político importante que enfrentó el kirchnerismo desde su ascenso al poder.⁸ Este conflicto se desató a raíz del intento de modificar el régimen vigente de retenciones a las exportaciones agrarias, extendiéndose durante los cuatro meses que van desde el anuncio de un nuevo régimen de retenciones móviles (la resolución 125/08) por el entonces ministro de economía Martín LoustEAU el 11 de marzo de 2008 hasta el anuncio de su derogación (el decreto 1176) por el entonces Jefe de Gabinete Alberto Fernández el 16 de julio. Recordemos las características más sobresalientes del conflicto y de sus resultados inmediatos.

En primer lugar, los distintos sectores de la burguesía agraria se opusieron unitariamente a la modificación de las retenciones. Las cuatro organizaciones patronales agrarias más grandes (SRA, CRA, CONINAGRO y FAA) integraron desde el comienzo una Comisión de Enlace que organizó las acciones de la burguesía agraria en su conjunto. En segundo lugar, esa burguesía agraria fue capaz de articular una alianza social más amplia alrededor suyo. Encolumnó a otros sectores de la burguesía con intereses en la producción agropecuaria o agroindustrial, recibiendo el apoyo de otras

⁷ Fuentes: INAP; López y Zeller (2010); y Bour y Susmel (2010).

⁸ Véase Bonnet (2010) para un análisis más detallado del conflicto en cuestión.

entidades patronales (como la coordinadora alimenticia COPAL y las cámaras del aceite CIARA y de la maquinaria agrícola CAFMA). Y, más importante aún, logró arrastrar a buena parte de los sectores medios de las ciudades y pueblos del interior y, más tarde, a una porción importante de los sectores medios de las grandes ciudades. La masividad que revistieron las acciones en muchas pequeñas y medianas ciudades de la región pampeana, y luego en grandes ciudades como Rosario y Buenos Aires, mostraron que las demandas de la burguesía agraria gozaron de amplio consenso en ellas. En tercer lugar, la burguesía agraria y agroindustrial desplegó un variado menú de medidas de resistencia. La medida inicial fue un *lock-out*. Pero también recurrieron a piquetes y asambleas en las rutas y en los accesos a empresas agroindustriales, así como a cacerolazos y movilizaciones de masas, prácticas más o menos novedosas.

Pero el conflicto tuvo, además, implicancias profundas. En primer lugar, aunque el kirchnerismo intentó presentarlo como un conflicto por la distribución de la riqueza entre el pueblo y la oligarquía, se trató de una disputa por parte del excedente y que tuvo en el centro un conflicto interburgués. El conflicto puso de manifiesto, en consecuencia, la primera ruptura en el bloque en el poder registrada desde 1999-2001. La burguesía agraria y agroindustrial enfrentó el intento del gobierno de aumentar las retenciones para hacer frente, fundamentalmente, a los vencimientos de deuda externa y al pago de subsidios, en aumento y en un contexto de crisis económica mundial, es decir, a la burguesía vinculada a la banca y las empresas privatizadas. Pero esta disputa por el excedente tuvo como causa subyacente una estrategia de construcción de consenso inconsistente con la realización de un ajuste tradicional. En la medida que los abultados superávit fiscal y de cuenta corriente comenzaron a recortarse, en ausencia de la disponibilidad – y la ausencia de voluntad política - de recurrir al endeudamiento externo, el gobierno profundizó su arbitraje neo populista disputando parte del excedente agropecuario. La burguesía agraria desafió ese arbitraje entre distintas fracciones de la burguesía que las administraciones duhaldista y kirchneristas habían sostenido durante la década.

En segundo lugar, la capacidad de la burguesía agraria y agroindustrial para identificar el rechazo al arbitraje entre fracciones de la burguesía con el rechazo de “clase media” al estilo político del gobierno en clave antipopulista posibilitó esa movilización masiva en las grandes ciudades que mencionáramos antes.

En tercer lugar, el conflicto acarrió a su vez una crisis política para la administración de Fernández de Kirchner. Porque el gobierno no perdió exclusivamente el apoyo de la burguesía agraria y agroindustrial sino que, conforme el conflicto fue radicalizándose, comenzó a perder el apoyo de la gran burguesía en su conjunto. A partir de cierto momento, la insistencia del gobierno en su decisión de aumentar las retenciones pasó a responder a razones predominantemente políticas: al objetivo de imprimir una suerte de derrota aleccionadora al *lock out* agrario. Y la burguesía en su conjunto, incluso aquellas fracciones que inicialmente habían apoyado las retenciones móviles, condenó este exceso de autonomía exigiendo una y otra vez que el gobierno negociara.

Esta crisis política se tradujo a su vez en una serie de acontecimientos críticos dentro de las propias filas de la administración de Fernández de Kirchner. Desató una crisis de gabinete; enfrentó con el ejecutivo nacional a varios gobernadores justicialistas y a muchos de los intendentes peronistas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe; partió a los bloques parlamentarios oficialistas y, finalmente, la coalición de gobierno quedó irreversiblemente quebrada después del voto en contra del vice-presidente radical Cobos en el Senado, que definió el resultado a favor de la burguesía agraria.

La crisis política también despejó el terreno para la organización de alguna alternativa de recambio del kirchnerismo, desde afuera y/o desde adentro del justicialismo. El citado voto en contra de Cobos abrió la posibilidad de cierta recuperación de la alicaída y dividida UCR y de su integración en una coalición opositora con el PS de Binner y la Coalición Cívica de Carrió. También impulsó la integración de una coalición opositora de derecha acercando al macrismo a sectores del PJ disidente alimentados por la defeción en el oficialismo (como Duhalde, Solá, Reutemann).

En síntesis, la crisis política parecía haber abierto un escenario característico de la historia política argentina reciente en el que, después de cinco años, un kirchnerismo desgastado parecía comenzar a perder iniciativa y consenso. Y las elecciones parlamentarias de junio de 2009 parecieron confirmar este escenario. El kirchnerismo continuó siendo la primera minoría (el Frente para la Victoria obtuvo un 31,2% de los votos), pero retrocedió y perdió representantes, mientras que tanto la alianza entre el radicalismo, el PS y la Coalición Cívica (el Acuerdo Cívico y Social, con un 30,7%) como el peronismo disidente (Propuesta Republicana y Unión Celeste y Blanco, con un 8%) avanzaron y ganaron representantes. Sin embargo, estas parlamentarias también confirmaron las dificultades que enfrentaba la oposición para capitalizar políticamente la derrota sufrida por el kirchnerismo en el conflicto con la burguesía agraria y agroindustrial y erigirse como una alternativa de recambio. El sistema de partidos, nunca se había recuperado de la crisis de representatividad de 2001. Y el arco partidario opositor, en particular, nunca había logrado erigirse en una alternativa desde las propias presidenciales de 2003. El conflicto agrario no había alcanzado para modificar esta realidad.

La crisis política resultante del conflicto entre el gobierno y la burguesía agraria y agroindustrial, entonces, generó una situación de vacío en el que, por una parte, la administración kirchnerista se encontraba en crisis pero, por la otra, la oposición tampoco podía recuperarse de su propia crisis y ofrecer una alternativa. Y en esta situación sucedió algo inédito en la historia política argentina reciente: el kirchnerismo recuperó la iniciativa política, recompuso el consenso alrededor de su administración y terminó imponiendo la reelección de Fernández de Kirchner en las presidenciales de 2011. Esta recuperación se inició a fines de 2009 o comienzos de 2010. Incluso es significativo el hecho de que en el centro de la crisis política que precedió esta recuperación hubiera estado la negativa de la burguesía agraria y agroindustrial a pagar mayores retenciones: en el convulsionado 2002, el pago de retenciones había sido precisamente una concesión de esa burguesía agraria y agroindustrial que apuntaba a contribuir con ese proceso de recomposición de la acumulación y la dominación capitalistas. La negativa de la burguesía agraria y agroindustrial a pagar mayores retenciones en 2008 puede interpretarse, en este sentido, como una suerte de declaración suya confirmando que ese proceso de recomposición de la acumulación y la dominación había concluido. Pero esto implica –y esta es, recordemos, la principal hipótesis que queremos proponer en este punto- que la dinámica política de la administración de Fernández de Kirchner ya no puede explicarse a partir de ese proceso de recomposición de la acumulación y la dominación. La presidenta, para valernos de la célebre frase de Lincoln, *swap horses when crossing streams*.

A juzgar por la evolución de la imagen presidencial informada por diversas encuestas, la administración de Fernández de Kirchner comenzó a recuperar consenso desde fines de 2009 o comienzos de 2010, y esta recuperación se sostuvo hasta que triunfó en las elecciones de octubre de 2011 con el mayor margen de apoyo obtenido por un candidato presidencial desde la recuperación de la democracia (54,1%, casi diez puntos por encima del 45,3% que había obtenido en 2007).⁹ Ciertamente, algunos acontecimientos azarosos contribuyeron con esta recuperación del consenso (entre ellos, especialmente, la sorpresiva muerte del ex presidente Néstor Kirchner), pero hubo dos factores en particular que desempeñaron un papel decisivo. En primer lugar, la expansión económica de la que había gozado Kirchner durante todo su mandato y Fernández de Kirchner durante el primer año del suyo se detuvo en 2009 junto con la agudización de la crisis mundial, pero se reinició en 2010 (volviendo a alcanzar un 9%). Los efectos de aquella desaceleración sobre el empleo y el salario, en consecuencia, fueron relativamente acotados y pasajeros, y muy pronto la expansión económica volvió a sustentar materialmente el consenso alrededor del kirchnerismo. Pero, en segundo lugar, Fernández de Kirchner articuló activamente ese consenso impulsando un conjunto muy amplio de iniciativas, muy diversas aunque con un carácter progresista/populista como denominador político común. Entre las principales se encuentran la citada estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral (en julio de 2008), la estatización de las AFJPs y el lanzamiento de

⁹ Poliarquía, OPSM, Römer y Rosendo Fraga, coinciden a grandes rasgos con esta evolución.

una artillería de medidas anticíclicas expansivas (en noviembre de 2008), la adquisición a la AFA de los derechos de televisación del fútbol de primera división mediante el programa Fútbol para Todos, una nueva Ley de Medios Audiovisuales (aprobada en octubre de 2009), la implementación de una Asignación Universal por Hijo (desde octubre de 2009), la implementación del plan de entrega de computadoras a alumnos Conectar Igualdad (desde 2010) y la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario (en julio de 2010). Además, desde 2008, medidas como la estatización de las AFJP, la disputa por el nombramiento de directores en las empresas con acciones del estado (derivadas de la estatización de las AFJP) y que escondía una presión por aumentar el reparto de dividendos y, la estatización parcial de YPF, entre otras, dan cuenta de la profundización de aquella estrategia de arbitraje neopopulista a la que nos refiriéramos antes.

El conflicto entre el gobierno de Fernández de Kirchner y la burguesía agraria de 2008, en síntesis, marcó un punto de inflexión en la dinámica política de la década. El kirchnerismo pudo sobrevivirlo. Sin embargo, inevitablemente, el primer kirchnerismo (del sexenio 2002-2007) sólo pudo sobrevivirse a sí mismo como un segundo kirchnerismo (del sexenio 2008-2013) que es diferente del primero. La empresa de recomposición de la acumulación y la dominación capitalistas después del ascenso de las luchas sociales y la crisis que culminaron en diciembre de 2001 había signado al primero. Pero: ¿qué empresa signa al segundo? ¿alguna? ¿o acaso su supervivencia, la reelección de octubre de 2011, fue apenas una jugarreta de la coyuntura a la historia?

Referencias

AAVV (2007): Dossier de la *Publicación de los Economistas de Izquierda* 3, Bs. As., EDI, 2007.

AAVV (2010): *La anatomía del nuevo patrón de crecimiento y la encrucijada actual*, Bs. AS., CENDA.

Aspiazu, D. y Schorr, M. (2003): “La renegociación de los contratos entre la Administración Duhalde y las prestatarias de servicios públicos. ¿Replanteo integral de la relación Estado – empresas privatizadas o nuevo sometimiento a los intereses de estas últimas?”, en *Realidad Económica* 193, Bs. As., IADE.

Aspiazu, D. y Schorr, M. (2008): “Del modelo de los noventa a la posconvertibilidad, en *Realidad Económica* 240, Bs. As., IADE.

Belkin, A. y Piva, A. (2009): “Elecciones del 28 de junio de 2009: el giro a la derecha en el ciclo político abierto por las jornadas de diciembre de 2001”, en *Herramienta* 42, Bs. As.

Bonnet, A. (1999): “Saber, creer y votar. 1999: elecciones menemistas”, en *Cuadernos del Sur* 29, Bs. As.

Bonnet, A. (2007a): “Kirchnerismo: el populismo como farsa”, en *Periferias. Revista de Ciencias Sociales* 14, Bs. As., FISyP.

Bonnet, A. (2007b): “Argentina: ¿un nuevo modelo de acumulación?”, en AAVV (2007).

Bonnet, A. (2008): *La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001*, Bs. As., Prometeo, 2008.

Bonnet, A. (2010): “El lock-out agrario y la crisis política del kirchnerismo”, en *Herramienta web* 6, Bs. As., 2010.

Bonnet, A. y Piva, A. (2011): “Estado y cambios en el estado argentino contemporáneo”, en *Revista de estudios Marítimos y Sociales* 3, Mar del Plata.

Bonnet, A. y Piva, A. (2013): “El estado en el kirchnerismo. Un análisis de los cambios en la forma de estado a partir de la crisis de 2001”, en Grigera (2013).

Bonvecchi, A. y Rodríguez, J. (2006): “El papel del poder legislativo en el proceso presupuestario argentino (1984-2004)”, en *Desarrollo Económico* 180 (45), Bs. As., IDES.

Bour, J. L. y Susmel, N. (2010): “La evolución del empleo público en la Argentina”, en *Informe de Coyuntura* 507, Bs. As., FIEL.

Cotarelo, M. C. (2012): *El proceso de formación de una fuerza social. Argentina 1993-2010*. Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales – UBA, Bs. As., mimeo.

Dagatti, M. (2013): “La refundación kirchnerista. Capitalismo, democracia nación en el discurso de Néstor Kirchner”, en Grigera (2013).

Grigera, J. (comp.) (2013): *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*, Bs. As., Imago Mundi.

Helmke, G. (2003): “La lógica de la defección estratégica: relaciones entre la corte suprema y el poder ejecutivo en la Argentina en los períodos de la dictadura y la democracia”, en *Desarrollo Económico* 170 (43), Bs. As., IDES.

Lavopa, A. (2006): “La Argentina posdevaluación. ¿Un nuevo modelo económico?”, en *Realidad Económica* 231, Bs. As., IADE.

López, A. y Zeller, N. (2010): *Un balance de las reformas administrativas en el Estado Nacional a 25 años de democracia*, Bs. As., INAP.

Piva, A. (2007): “Modo de acumulación y hegemonía en Argentina: continuidades y rupturas después de la crisis de 2001”, en AAVV (2007).

Piva, A. (2012): *Acumulación de capital y hegemonía en la Argentina menemista*, Bs. As., Biblos.

Piva, A. (2012b) “¿Una nueva hegemonía? El estado frente al conflicto social en la Argentina post crisis (2003-2010)” en E-Latina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, vol. 10, n° 40, julio – setiembre de 2012, pp. 45-66.

Sartelli, E. et alii (2008): *Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en el seno de la burguesía (marzo – julio de 2008)*, Bs. As. RyR.

Schorr, M. y Wainer, A. (2005): “Argentina: muerte y resurrección? Notas sobre la relación entre economía y política en la transición del modelo de los noventa al del dólar alto”, en *Realidad Económica* 211, Bs. As., IADE.

Thwaites Rey, M. y López, A. (2004): “Argentina: la debilidad regulatoria como estrategia política”, en *Revista del CLAD Reforma y Democracia* 28, Caracas, CLAD.

Varessi, G. (2010): “La Argentina post-convertibilidad: modelo de acumulación”, en *Problemas del desarrollo* 41 (161), UNAM, México.